



JUZGADO SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA - SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., 07 de noviembre de 2023

Expediente:	11001333502720200029600
Demandante:	Alexander Kandia Ramírez
Apoderado:	Yolanda Leonor García Gil yoligar70@gmail.com
Demandado:	Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co ; jcortess@deaj.ramajudicial.gov.co ; cparedfo@deaj.ramajudicial.gov.co ; mafe_1115@hotmail.com
Procurador Delegado:	mroman@procuraduria.gov.co ; procjudadm195@procuraduria.gov.co
ANDJE	procesosnacionales@defensajuridica.gov.co ; procesos@defensajuridica.gov.co

Vencido el termino anterior, procede el despacho a dar continuación con el trámite procesal que corresponde.

Es así, que mediante auto admisorio debidamente notificado a las partes, y debidamente contestada la misma y en consideración al artículo 42 de la ley 2080 del 25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión”, entre otros, adiciona el artículo 182A, “Sentencia Anticipada”

Se podrá dictar sentencia anticipada:

- 1. Antes de la audiencia inicial:*
- a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;*
 - b) Cuando no haya que practicar pruebas;*
 - c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;*
 - d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. (Negrillas fuera de texto)*
- (...)*
- 2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.*

Ahora bien, en consideración a lo dispuesto por el inciso primero del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, el cual reza:

“El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.”

Fijación del litigio:

En primer lugar, corresponde al Despacho establecer, si ¿es procedente inaplicar por inconstitucional la expresión del artículo primero del decreto 383/384 de 2013: “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”?

En segundo lugar, se procederá a establecer si se configura la nulidad del siguiente acto administrativo:

- Resolución No. 7570 del 24 de octubre de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca en, donde niega los derechos prestacionales reclamados por el demandante, por la inaplicación parcial del Decreto 383 de 2013. (se puede observar en el documento en PDF denominado “02Anexos202000296” del expediente electrónico)

En tercer lugar, se procederá a determinar la existencia de acto ficto o presunto por la no contestación de un recurso de apelación en contra de la Resolución No 7570 del 24 de octubre de 2016, el cual fue concedido para ser tramitado en segunda instancia a través de la Resolución No 284 del 30 de enero de 2017.

Finalmente, determinar si la parte demandante tiene derecho a que se le reconozca, reliquidé y pague las prestaciones salariales y sociales tomando como factor salarial la bonificación judicial del decreto 383/384 de 2013 a partir del 1 de enero de 2013.

La **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, mediante escrito, propone como excepción previa, la **integración del litisconsorte necesario**, solicitando la vinculación de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que se giren los recursos necesarios en caso de que se presente una eventual condena en su contra.

Argumentó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política y la ley 4ª de 1992, corresponde al Gobierno Nacional fijar los emolumentos salariales y prestacionales, siendo la Rama Judicial un simple ejecutor, quien debe acatar y aplicar lo reglado por el ejecutivo, frente a sus servidores.

De conformidad con la Ley 2080 de 2021 la cual en su artículo 38 modificó el parágrafo 2 del artículo 175 del C.P.A.C.A, en concordancia con el Art. 201A de la norma inicialmente mencionada, ordena correr traslado de las excepciones propuestas por el término de tres (03) días. Este trámite procesal que fue surtido el 15 de junio de 2023, en el momento en que el apoderado de la entidad demandada, envía copia mediante los correos electrónicos del escrito de contestación a las partes y sus intervinientes.

Frente a la excepción propuesta, debe señalarse en primer lugar que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, no se regulo acerca del Litis consorte necesario, por lo anterior y por remisión expresa del artículo 306 de la misma Ley, se hace necesario acudir al Código General del Proceso, esto es a lo consagrado en su artículo 61, la norma referida dispone que la integración del contradictorio puede solicitarse de oficio o a petición de parte y antes de que se hubiese dictado sentencia de primera instancia, todo ello también en concordancia con el artículo 100 del CGP numeral 9.

Para el caso en concreto, el despacho advierte que la excepción denominada Integración De Litis Consortes Necesario, que tiene como fin vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aunque estén directamente consagradas en el numeral 9 del artículo 100 del CGP, es un tema que ya está lo suficientemente decantado, es así, que la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “E”, en providencia del 05 de diciembre de 2019, expediente 110013335008201800031-02; demandante: Lusmila Calderón contra la Nación Rama Judicial Dirección ejecutiva de Administración Judicial, con ponente Magistrado Dr. Jaime Alberto Galeano Garzón, concluye:

“La Sala Unitaria, confirmará el auto impugnado, habida consideración que la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública, no deben ser parte de este asunto como extremo demandado, para responder por las pretensiones que son objeto de controversia.” (Negrilla y subrayado, fuera de texto)

(...)

“Lo anterior por cuanto no se evidencia la existencia de un “vinculo inescindible con la relación de derecho sustancial que es objeto de debate en el proceso”, que permita llamar como Litis consortes necesarios a las entidades convocadas, con el objeto de que estas respondan por la condena que pueda proferirse en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues como quedó explicado, el reajuste de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, le compete exclusivamente a la entidad empleadora de la señora Lusmila Calderón.”

Por lo anterior este despacho concluye que la excepción propuesta, no ha de prosperar, toda vez que, las súplicas de nulidad por parte del demandante, van dirigidas a lograr que se declare la nulidad de un acto administrativo y la configuración del silencio administrativo negativo producto de la no contestación de un recurso de apelación en contra del acto acusado.

Resuelto lo anterior, este despacho, prescindirá de la audiencia inicial, decretará las pruebas a que haya lugar y correrá traslado para los alegatos de conclusión por diez (10) días comunes a las partes, al Ministerio Público y demás intervinientes, en virtud a las normas anteriormente expuestas.

Finalmente, en consideración a la solicitud de renuncia presentada por la doctora **María Fernanda Ocampo Rico**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.026.588.695 y T.P No 375.745 del C.S de la J, en calidad de apoderada judicial de la parte demandada, esta será aceptada, por cuanto, la misma acredita, mediante acto administrativo, resolución 6847 del 30 de agosto de 2023 su desvinculación con la entidad, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del CGP.

Control de legalidad.

En consideración al Artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, este despacho no encuentra irregularidad alguna que pueda conllevar a una posible nulidad y considerando que el control de legalidad tiene como objeto depurar de cualquier vicio el presente proceso, se procede a declarar saneado el mismo. Sin embargo, se exhorta a las partes si a bien lo tienen presentar en el término de ejecutoria del presente auto, presentar las correspondientes objeciones, sobre la posible existencia de vicios o irregularidades que consideren.

En consecuencia, el suscrito Juez Segundo Administrativo Transitorio Del Circuito Judicial De Bogotá D.C.:

RESUELVE:

PRIMERO: Prescindir, de la audiencia inicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Decrétese, como medios de prueba, los documentos que se acompañan a la demanda, visibles en el expediente Digital **entre ellos** la:

- Reclamación administrativa radicada el día 20 de octubre de 2016 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca (se puede observar en el documento en PDF denominado “02Anexos202000296” del expediente electrónico).

- Resolución No. 7570 del 24 de octubre de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca en, donde niega los derechos prestacionales reclamados por el demandante, por la inaplicación parcial del Decreto 383 de 2013. (se puede observar en el documento en PDF denominado "02Anexos202000296" del expediente electrónico)
- Constancia expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (se puede observar en la página 01 del documento en PDF denominado "27Certificacion, del expediente electrónico), donde se evidencia el cargo desempeñado por la parte demandante y sus extremos temporales.

TERCERO: Declárese, no probada la excepción denominada integración del litisconsorte necesario, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Reconocer, personería para actuar al doctor **Jhon Fredy Cortés Salazar**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.013.362 y T.P No 305.261 del C.S de la J, en calidad de apoderado judicial de la parte demandada de acuerdo al poder (se puede observar en la página 01 del documento en PDF denominado "25Poder" del expediente electrónico), sin embargo, el anterior se entiende terminado, en consideración al poder allegado por la doctora **María Fernanda Ocampo Rico**. **Por ello, se Reconocer**, personería para actuar a la doctora **María Fernanda Ocampo Rico**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.026.588.695 y T.P No 375.745 del C.S de la J, en calidad de apoderada judicial de la parte demandada de acuerdo al poder (se puede observar en la página 2 del documento en PDF denominado "30Poder" del expediente electrónico).

QUINTO: Declárese saneado el proceso, hasta esta etapa, por las razones expuestas.


SEXTO: Córrase, traslado para alegar de conclusión por escrito a las partes y a los intervinientes, por el término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente a la notificación por estado del presente auto de conformidad con el artículo 182A de la ley 2080 de 2021.

SEPTIMO: Profiérase la sentencia de manera anticipada.

OCTAVO: Conceder la solicitud de renuncia presentada por la doctora **María Fernanda Ocampo Rico**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.026.588.695 y T.P No 375.745 del C.S de la J, en calidad de apoderada judicial de la parte demandada, por las razones expuestas en esta providencia.

NOVENO: Reconocer, personería para actuar al doctor **Carlos Rafael Paredes Forero**, identificado con cédula de ciudadanía No 71.777.758 y T.P No 169.218 del C.S de la J, en calidad de apoderado principal de la parte demandada de acuerdo al poder (se puede observar en el expediente electrónico).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Esteban Javier Palacios León
 Juez